

Los que ganan y los que pierden con la guerra

Jueves, 16 Abril 2015 00:00



Por Diana Grajales.

Delegación de paz FARC-EP

Al calor del actual proceso de conversaciones de Paz de La Habana, mucho se ha hablado sobre las responsabilidades de la guerrilla y en concreto de las supuestas responsabilidades de las FARC-EP por los hechos ocurridos durante más de 50 años de conflicto. La capacidad de creación de opinión pública de los medios de comunicación **(todos los masivos y más influyentes en manos de la burguesía)** así como el peso de la ideología dominante, hacen que lo más obvio pase desapercibido para la sociedad colombiana. Es evidente que ni por capacidad, ni por implantación, ni por trayectoria, la guerrilla puede ser la responsable de las trágicas consecuencias del conflicto colombiano, más bien al contrario: las FARC-EP somos una consecuencia de la existencia de situaciones de inequidad social y de falta de justicia que motivaron el alzamiento armado.

Ni el campesinado colombiano, ni nuestro pueblo, ni menos aún la insurgencia, hemos ganado algo durante el conflicto, más bien todos los anteriores hemos perdido derechos, vidas, sueños, familias, amigos, compañeros y compañeras de lucha; daños irreparables que hacen parte del interminable inventario de pérdidas provocadas por la guerra. A ello debemos añadir y hacer énfasis en el carácter altruista de nuestra rebelión: los rebeldes, como todos los revolucionarios, lo somos por convicciones y principios, en defensa de intereses generales, no para obtener ningún beneficio personal ni acumular riqueza alguna.

Por el contrario, la guerra supone un gran negocio, un negocio añadido a la abusiva e histórica acumulación de riqueza por parte de la oligarquía colombiana que han hecho de nuestra patria el segundo país más inequitativo de toda América Latina, según el índice GINI de las Naciones Unidas, índice que mide como se realiza el reparto de la riqueza de un país entre sus habitantes. Solamente el Plan Colombia supuso más de 10.000 millones de dólares en ayudas de los EE. UU. al Estado colombiano para combatir a la guerrilla, dinero que en su mayoría acabó en manos de contratistas vinculados a las Fuerzas Militares. Otro tanto supuso la segunda fase de dicho Plan, el llamado Plan Patriota. El principal resultado de esto fue la “feria de contratos”, para la guerra que acabaron distribuyéndose algunos militares de alta graduación, contratistas, intermediarios y otros comisionistas que han hecho de la guerra un inmenso negocio, por lo que poco interés pueden tener en la llegada de la paz con justicia social.

Oculto tras la pantalla de los millones de dólares invertidos en la guerra, los procedentes de los EE.UU. y los del presupuesto colombiano y por tanto no dedicados a la inversión social como educación, salud, o infraestructuras, se encuentra la política sistemática de apropiación ilícita de tierras, hay más de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a los más de 6 millones de campesinos desplazados. Esta práctica pone de manifiesto que la verdadera razón de ser del conflicto interno es el robo de la tierra a sus legítimos dueños, los pequeños campesinos unidos a la tierra desde su nacimiento, los que la cuidan, la hacen producir y la intentan conservar y

preservar de la degradación medioambiental para las futuras generaciones de colombianos y colombianas. La historia de las guerras civiles y del conflicto interno colombiano se reduce al círculo vicioso de la usurpación violenta de las tierras, desplazamiento, colonización de nuevas tierras por los campesinos desplazados y nuevamente violencia, usurpación y desplazamiento de sus territorios. Así lleva ocurriendo desde la independencia de la República.

Por ello, las FARC EP hemos dicho que hablar de responsabilidades en el proceso de paz, es hablar de la responsabilidad del Estado que acaba siempre en el Palacio Presidencial; es hablar de inmensas organizaciones criminales incrustadas en distintas estructuras del Estado, de grupos paramilitares vinculados a terratenientes, empresarios, sectores financieros y políticos del Establecimiento que nunca han sido desmantelados.

Las FARC-EP hemos afirmado que “si bien los integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales y los integrantes de los escuadrones paramilitares (responsables de graves crímenes contra la población civil) han quedado en la impunidad en la mayoría de las ocasiones, quienes siempre han permanecido impunes en Colombia han sido los auténticos máximos responsables de los crímenes internacionales perpetrados, los que indefectiblemente se han beneficiado económica y políticamente de la violencia desatada por el Estado y por sus auxiliadores”. (Iván Márquez, intervención en el Panel de debate sobre justicia transicional Panel ¿Qué tanta justicia es necesaria para la paz? 26 marzo 2015. Bogotá)

Si Colombia aspira a que este proceso de paz sea el definitivo, a que se creen las condiciones necesarias para evitar la cíclica repetición de la violencia criminal del Estado y del Establecimiento, si se quiere garantizar para siempre la no repetición de todo ello, incluido el surgimiento de nuevos grupos rebeldes, la lógica indica que deberán buscarse responsabilidades entre aquellos que siempre han ganado con la guerra, no entre los que la guerra solo les ha causado dolor, sufrimiento y pérdidas. La responsabilidad deberá exigirse a quienes nunca en un proceso de paz de los muchos habidos en nuestra patria se les ha exigido hasta ahora, a los máximos responsables de la violencia desatada por los poderes políticos y económicos desde hace décadas. Los únicos que siempre y sin excepción han permanecido en la impunidad y por tanto nunca han sido disuadidos de poner fin a sus actuaciones criminales. Los auténticos responsables del conflicto social, político y armado que los colombianos y colombianas hemos soportado: los usurpadores y despojadores de la riqueza de todo el pueblo colombiano.